

Estados Unidos y América Latina en el siglo XXI

Resumen:

Las relaciones estadounidenses con América Latina se encuentran actualmente en constante cambio. En las principales cuestiones políticas, Washington y la región están en desacuerdo. En este tipo de materias que engloban asuntos como el comercio internacional y el esfuerzo por construir una nueva arquitectura financiera no hay grandes coincidencias. En asuntos de marco político, como el rol de Venezuela en el hemisferio, el embargo de Estados Unidos a Cuba, o la problemática cuestión de la inmigración ilegal tampoco existen puntos de coincidencia. Mientras que Estados Unidos están “distráidos” por dos guerras en curso en Afganistán e Irak y dos déficit que limitan las opciones del Gobierno estadounidense, América del Sur, en concreto, está buscando diversificar su comercio y sus opciones de inversión. La región más favorecida por América Latina para sus exportaciones de productos básicos es China en particular y Asia en general. México se encuentra en una situación más difícil por su pertenencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Cualquier cambio que concierne a las cuestiones políticas actuales no será tratado hasta que se sepa el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2012. Aún así, si los cambios políticos dependen del Congreso estadounidense es difícil predecir medidas rápidas o positivas en relación a los temas tratados en este artículo.

Palabras clave:

Brasil, BRIC, China, Cuba, Cumbre de Doha, cárteles de la droga, Área de Libre Comercio de las Américas-ALCA, G-20, inmigración, México, nueva arquitectura financiera internacional, Venezuela

Abstract:

U.S.-Latin American relations are currently in flux. On major policy questions, Washington, D.C. and the region are in disaccord. On major policy issues such as global trade and the effort to construct a new financial architecture there is little agreement. On broader policy questions such as the role of Venezuela in the Hemisphere, the U.S. embargo on Cuba, or the thorny question of illegal immigration there is no meeting of the minds. While the U.S. is distracted with two ongoing wars in Iraq and Afghanistan and two deficits that limit the options available to the U.S. government, South America, in particular, is seeking to diversify its trade and investment options. The region of choice for Latin American exports and commodities is China, specifically, and Asia in general. Mexico is in a more difficult position given its integration with North America through NAFTA. Any modification of current policy issues will not be addressed until the outcome of the U.S. presidential election of 2012 is known. Even then, if policy change depends on the U.S. Congress, it is difficult to predict rapid or positive action on the issues discussed in this article.

Keywords:

Brazil, BRIC, China, Cuba, Doha Development Round, drug cartels, FTAA, G-20, immigration, Mexico, new financial architecture, Venezuela

Riordan Roett

The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies,
Johns Hopkins University

Estados Unidos y América Latina en el siglo XXI

Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina necesitan renovar su enfoque. Mientras que la región, y en particular Brasil, buscan una mayor autonomía en el sistema internacional, Estados Unidos parece no ser consciente de las tensas relaciones entre Washington y los países de la región. Así, mientras que Estados como Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, y en menor grado Argentina, se han distanciado de Estados Unidos por cuestiones ideológicas, los gobiernos más moderados se muestran perplejos ante la aparente indiferencia de Estados Unidos respecto a las necesidades de desarrollo y los desafíos en América Latina.

El ejemplo más claro es el de México. Muy dependiente del mercado estadounidense, el freno económico en Estados Unidos ha tenido un impacto negativo en las exportaciones mexicanas. Este descenso también ha reduci-

do significativamente las remesas que desde hace décadas los trabajadores en Estados Unidos mandaban a su país de origen. La situación se ha visto agravada por la falta de voluntad por parte del Congreso de Estados Unidos de facilitar la necesaria financiación a la Iniciativa Mérida, cuyo objetivo era desarrollar las regiones más desfavorecidas de México. La guerra contra el narcotráfico es otro claro ejemplo de la indiferencia mostrada por Washington en la difícil situación de México. Mientras que públicamente se apoya la guerra al narcotráfico llevada a cabo por el presidente Calderón –en realidad, el “dueño” de la guerra es Estados Unidos, país en el que las drogas son compradas y consumidas– hay pocos esfuerzos por parte de Estados Unidos en ayudar sustancialmente a México en este asunto. El gobierno ha pedido la reducción o el fin de la circulación de armas desde

Estados Unidos a los cárteles de la droga, pero la respuesta de la clase política de Estados Unidos es que el portar armas es un derecho de los ciudadanos otorgado por la Constitución.

Las autoridades mexicanas han pedido a Estados Unidos hacer accesibles, para las autoridades, las informaciones de las cuentas bancarias, pudiendo confirmar así el lavado de dinero por parte de los cárteles de la droga, pero la respuesta fue que las Leyes de Secreto Bancario estadounidenses lo impiden. Además, México ha solicitado a Estados Unidos cooperar para frenar el flujo de productos químicos a Colombia y a otros países en los que se elabora cocaína. La respuesta fue que Estados Unidos no tiene autoridad para impedir el comercio internacional, especialmente si los envíos se realizan a través de terceros (O'Neil, 2009:63).

Como segundo ejemplo podemos destacar la miopía que rodea las relaciones estadounidenses con Brasil, el representante BRIC en la región y un actor emergente en los asuntos internacionales (Roett, 2010:1). Se han dado diferencias sustanciales entre los dos países en lo referente al golpe de Estado en Honduras y más recientemente, en el viaje del presidente Lula, junto con el primer ministro turco, a Irán para intentar influir al gobierno para que respete la política de Naciones Unidas en materia de proliferación nuclear y evitar así sanciones. En relación con

esta situación se realizó una votación en el Consejo de Seguridad y Brasil no apoyó a Estados Unidos. Desde esa votación, Estados Unidos ha mantenido las distancias. En un discurso ante el Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, refiriéndose a los retos regionales para la política exterior de Estados Unidos destacó particularmente a Rusia, India y China –pero no se refirió a la “B” de los BRIC– (Clinton, 2010:1). La audiencia se percató de la omisión inmediatamente. Mientras que Brasil y Estados Unidos tengan diferencias políticas, Estados Unidos va a tener que entender que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Itamarati, para bien o para mal, no va a, ni tiene la obligación de, seguir las líneas políticas de Washington en todos los casos. Brasil, también, tiene sus propios intereses nacionales y objetivos de seguridad nacional que tienen que ser respetados.

Dos asuntos en el marco político están impactando de forma negativa en las relaciones entre América Latina y EEUU y, por consiguiente, con la Unión Europea. En primer término, el comercio y en segundo lugar, el requerimiento y la necesidad de una nueva arquitectura financiera. Las dos son prioridades políticas clave para los mercados emergentes. En ambos casos la respuesta de Estados Unidos ha sido vacilante e insatisfactoria.

I. Controversias comerciales

A finales de 1994, en una Cumbre con los jefes de Estado del Hemisferio en Miami, Florida, Estados Unidos tomó la iniciativa de hacer una propuesta para la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La esperanza residía en que en un espacio de tiempo reducido la integración económica podría, y debería, englobar completamente al hemisferio occidental. La iniciativa del ALCA fue uno de los puntos culminantes del llamado “Consenso de Washington” que fue concebido unos años atrás para llevar a la región hacia la economía de mercado, la privatización de las empresas públicas, reformas fiscales y una serie de iniciativas macroeconómicas encaminadas a mejorar la competitividad y la productividad en la región (Kuczynski y Williamson, 2003:1). ¿Fue un esfuerzo demasiado pequeño y que llegó demasiado tarde? A finales de la década estaba claro que la iniciativa no estaba dirigida a asuntos sustanciales de vital importancia para los habitantes de la región: empleo, educación, reducción de la pobreza y de la inequidad, y acceso a una sanidad pública de calidad. Mientras que los economistas que idearon el Consenso estaban encantados con el éxito de las limitadas, en caso de ser indispensables, reformas macroeconómicas, pasaron por alto las necesidades sociales de la región –en particular la creación de empleo, educación y sanidad de calidad, y

vivienda–. En efecto, el esfuerzo llegó a su fin con la elección democrática del presidente Hugo Chávez en Venezuela en 1998 que acusó al Consenso de “capitalismo salvaje”. La administración del presidente George W. Bush decidió entonces continuar con una aproximación a través del modelo radial para la integración regional y persiguió algunos acuerdos comerciales sub-regionales; algunos de ellos fueron aprobados por el Congreso estadounidense, mientras que otros no, entre ellos los acuerdos con Colombia y Panamá. La administración del presidente Barack Obama aparentemente ha abandonado el afán por continuar esforzándose para avanzar en una integración económica o para convencer al Congreso de aprobar aquellos que se negociaron con éxito, pero que necesitan de la ratificación por parte del Congreso.

Paralelamente a la iniciativa del ALCA en las Américas, Estados Unidos apoyó una nueva ronda de comercio global, la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las negociaciones se iniciaron en noviembre de 2001 con el propósito de reducir las barreras arancelarias en todo el mundo para permitir a los países incrementar el comercio internacional. Después de siete años de discusiones y múltiples reuniones en las altas esferas, la Ronda de Doha colapsó en julio de 2008. La principal causa fue la resistencia de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) a abrir sus mercados

para los productos agrícolas de las economías de mercados emergentes. La agricultura es de vital importancia para los países en desarrollo, ya que el 75% de su población vive en zonas rurales y la inmensa mayoría dependen de la agricultura para su supervivencia. Una antigua propuesta expuesta en Doha, Qatar en 2001, pedía que en el acuerdo final figurase un compromiso para lograr notables mejoras en el acceso a los mercados, reducciones (y finalmente eliminación) de todas las formas de subvención de exportación y reducciones sustanciales en medidas de distorsión comercial.

Durante las diferentes rondas, desde la UE y países líderes, como Brasil e India, se insistió a Estados Unidos para que realizara una oferta más generosa para la reducción del apoyo a la agricultura interna, generadora de una gran distorsión del comercio. Estados Unidos había solicitado a la UE y a los países en vías de desarrollo que aceptaran la propuesta de reducir de forma sustancial los aranceles y limitar el número de productos importados sensibles y productos especiales que estarían exentos de los recortes/reducciones. Los productos importados sensibles son de mayor importancia para los países desarrollados, como los de la UE, mientras que los países en desarrollo están más relacionados con los productos especiales –aquellos exentos tanto de los dos recortes arancelarios como de la reducción de subvención debido al desarrollo–, la

seguridad alimentaria o por las consideraciones de los medios de subsistencia.

En posteriores reuniones del G-20 (las 20 mayores economías a nivel mundial) se realizaron sendos llamamientos para la reanudación de las conversaciones, pero a finales de 2010 podemos hablar de un ligero, si acaso existente, avance en este sentido. Una de las cuestiones clave es si el Congreso de Estados Unidos va a otorgar o no al presidente Obama autoridad por “la vía rápida”, es decir, la autoridad para negociar un tratado comercial que no pueda ser enmendado por el Congreso sino sólo expuesto a votación, sí o no, una vez que el borrador del tratado haya sido presentado por la Casa Blanca. Dada la paralización en el Congreso de la mayoría de las cuestiones políticas, parece poco probable que el Congreso vaya a negociar de buena fe con la Casa Blanca por la vía rápida, realidad que nos llevaría al probable resultado de que habrá un pequeño o nulo avance en la política de comercio internacional durante algún tiempo.

II. Una nueva arquitectura financiera

Con el inicio de la crisis global financiera en 2008, puesta claramente de relieve por el colapso de Lehman Brothers, se volvió obvio que los nuevos jugadores de los mercados

emergentes, quienes no fueron responsables del debacle, debían de ser partícipes en el debate político sobre cómo reestructurar las finanzas mundiales.

La administración del presidente saliente George W. Bush reactivó el G-20 y convocó una reunión en Washington en noviembre de 2008. Pero la reunión no fue fructífera. La nueva administración demócrata no participó. La discusión real estaba programada para abril de 2009 en Londres cuando el nuevo presidente de Estados Unidos participaría por primera vez.

Empezó a notarse que los países de mercados emergentes –Brasil, China, India, Sudáfrica entre otros– se mantendrían firmes en su preferencia por la búsqueda de reformas de amplio alcance del sistema financiero internacional (Whitehead, 2010:45). Culparon a los países industrializados de la crisis. Un sistema de control escaso, escándalos hipotecarios, déficit, etc. fueron las causas de la crisis, ninguna de las cuales era responsabilidad de los países en desarrollo. Durante la discusión se puso especial énfasis en la redistribución de los derechos de voto en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Establecido por los acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, la representación de las nuevas economías de mercados emergentes estaba deplorablemente subordinada a las envejecidas y mucho más pequeñas economías de

la “vieja” Europa. La delicada cuestión política era cómo redistribuir la equidad entre participación y asientos.

El G-20 volvió a reunirse en Pittsburg, Pennsylvania, en septiembre de 2009 y en Toronto en junio de 2010. La agenda era similar: ¿cuándo cederían los países desarrollados, en concreto los Estados europeos, en su postura privilegiada en el Directorio Ejecutivo del FMI para permitir una mayor participación –tanto financiera como política– de Estados como Brasil, China y la India, en particular? Poco se ha avanzado, pero en el encuentro anual del Banco Mundial (BM) y del FMI en Washington en octubre de 2010, los mayores mercados emergentes impusieron un ultimátum a los países desarrollados –querían una decisión en la próxima Cumbre en Seúl, Corea del Sur en noviembre de 2010–.

Con toda la razón, los mercados emergentes se muestran escépticos ante las intenciones de los actuales accionistas. En una reunión previa en 2008, los miembros con derecho a voto se mostraron favorables a transferir el 5% de su voto a las mayores economías emergentes, pero la recomendación no ha sido aprobada por aquellos países que cuentan con el suficiente número de votos para ratificar el acuerdo. En 2010, las economías emergentes solicitaron que un 5-6% más de los votos se transfiera al lado que ellos ocupan en la mesa de negociación.

La política es intensa. Los países más pequeños de la UE, que eran mucho más importantes al finalizar la Segunda Guerra Mundial, son ahora países de segundo orden en términos de producción, y de su contribución a la economía mundial en términos de comercio y ahorro. Pero el orgullo nacional juega un papel muy importante en los debates internos de qué países van a perder su asiento. ¿Debería haber un sistema de asiento rotatorio de la UE para los países más pequeños? ¿Dónde se traza la línea entre países grandes y pequeños de la UE? Estas preguntas se han estado considerando en una época de gran volatilidad en las finanzas de la UE con constantes riesgos de impago por parte de alguno de los países más débiles (España, Portugal, Irlanda, etc.). Y Estados Unidos, siendo el mayor titular de votos, también es observado con algo de desconfianza. Jura defender su “veto” en el Fondo mientras que su economía está experimentando altos niveles de desempleo, una caída en la productividad y dos crecientes déficit que impiden la capacidad de Washington de empeñarse o forzar cambios en el FMI.

Las consecuencias tienen que favorecer forzadamente a las economías en desarrollo. Sus economías van a crecer durante el próximo año, o quizás dos, con tasas de crecimiento impresionantes, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea no lo van a lograr. Las economías en desarrollo, siguiendo la crisis financiera que empezó con la devaluación del bath tailan-

dés a mediados de 1997, continuando con el colapso del sistema monetario en Rusia en 2008 y Brasil en 2009, asumieron una reforma bancaria integral. Acumularon reservas extranjeras para evitar tener que cumplir con las “condiciones” del FMI en el caso de ocurrir otra crisis. Han diversificado sus exportaciones y en el proceso poseen un valor agregado para hacerlas más competitivas en diferentes mercados mundiales. La creciente importancia de las economías de los países en desarrollo es clara. Varias predicciones mantienen que la clasificación/ranking de las economías mundiales va a cambiar de forma dramática en los próximos 20 a 25 años, siendo los países de la UE los que van a perder puestos de forma significativa. China va a emerger como la mayor economía mundial, seguida por Estados Unidos, después los otros grandes Estados en desarrollo –India y Brasil, en particular–, seguidos por Corea, México y Sudáfrica. El tiempo de cambio es ahora, antes de que se dé una crisis de confianza en el sistema de gobernanza mundial y una creciente tensión política en un sistema que se enfrenta a cambios históricos.

III. Otras divergencias políticas en EEUU y América Latina

Existen otras cuestiones políticas importantes en que las tampoco hay acuerdo entre Washington y las capitales de la región.

Venezuela

El régimen de Hugo Chávez ha asumido una postura diplomática polémica respecto a los EEUU, a pesar de la dependencia de su país –y de los EEUU– de las exportaciones de petróleo destinadas al mercado estadounidense.

Varias administraciones de Estados Unidos han intentado ejercer presión sobre países de la región, en particular sobre Brasil, para que hicieran algo respecto a Chávez (Hidalgo, 2010:78).

La postura de Brasilia es clara. No va a interferir en asuntos internos de sus vecinos. Ignorando la posición privada del gobierno brasileño, la política pública cuenta con Caracas en las viejas iniciativas regionales. Dejando la ideología de lado, la colaboración es mejor que la discordia. Brasil no tiene las mismas cuestiones geopolíticas con Venezuela que Estados Unidos. El presidente Lula, para frustración de Estados Unidos, ha intentado ser incluyente respecto al régimen de Chávez y parece que la nueva administración brasileña va a seguir líneas políticas similares en este aspecto.

Cuba

El embargo estadounidense y la falta de relaciones diplomáticas con La Habana son importantes cuestiones de desacuerdo entre Estados Unidos y la región. Esta realidad se ve agravada, lógicamente, por la existencia de la base americana en Guantánamo que tiene prisioneros detenidos por Estados Unidos a raíz de las guerras en Irak y Afganistán. En la región recuerdan muy

bien que Obama, tanto como candidato por el Partido Demócrata como ya una vez elegido presidente, comprometió a su administración a cerrar la base de Guantánamo; ha sido imposible hacerlo debido a la incapacidad de llegar a un acuerdo con el Congreso. La cuestión sigue siendo controvertida y sin una solución inmediata.

El embargo económico, en vigor desde 1960 (y codificado en la Ley en 1992) tenía el propósito de que el gobierno de Cuba avanzara hacia “una democratización y un mayor respeto hacia los derechos humanos”. En 1996, el Congreso aprobó la Ley Helms-Burton, quedando aún más restringida la posibilidad de ciudadanos estadounidenses de hacer negocios en o con Cuba, y quedaron implantadas las restricciones sobre la concesión de ayudas oficiales o privadas a cualquier Gobierno sucesor en La Habana, al menos hasta que ciertas denuncias y reclamaciones en contra del gobierno de Cuba fueran aclaradas. En 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial al poner fin a la práctica de las filiales extranjeras de empresas estadounidenses de comerciar con Cuba. En el año 2000, Clinton autorizó la venta de ciertos productos humanitarios a la isla.

Durante la campaña presidencial de 2009, Barack Obama prometió volver sobre el asunto de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Pero el 2 de septiembre de 2010, el presidente Obama renovó el embargo por un año más sin dar ninguna explicación más allá de que el embargo

“es una cuestión de interés nacional”. Desde 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado anualmente el embargo como una violación del derecho internacional. Muchos miembros del Congreso parecen ahora más dispuestos a considerar el levantamiento del embargo; lo que no está nada claro es si una mayoría apoyaría una medida así. La comunidad empresarial estadounidense se muestra cada vez más a favor de levantar el embargo para poder beneficiarse de la venta de productos estadounidenses al Gobierno de Cuba. Grupos de derechos humanos, tanto en Cuba como en Estados Unidos, se muestran favorables al fin del embargo. Cualquier movimiento tendrá que esperar hasta que se obtengan los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 2012.

Inmigración

El debate sobre trabajadores indocumentados en Estados Unidos se ha convertido en un importante campo de batalla en la política estadounidense. Aunque afecta ante todo a México, la situación actual también atañe a los inmigrantes de Centroamérica y el Caribe, al igual que a países de América del Sur como Ecuador; Filipinas, China y Corea del Sur, en menor medida, también son origen de la inmigración ilegal que llega a Estados Unidos.

La actitud de los ciudadanos estadounidenses cambió radicalmente después de los

ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. Las encuestas de opinión muestran que muchos estadounidenses vinculan la restricción de la inmigración –legal o ilegal– con seguridad. Muchos políticos insisten en que los inmigrantes les están quitando puestos de trabajo a los ciudadanos estadounidenses, que para ellos no rige la ley, y que son una carga para servicios públicos como las escuelas y los hospitales.

El debate acerca de la inmigración tomó un giro drástico en abril de 2010 cuando la gobernadora del Estado de Arizona aprobó el Proyecto de Ley más duro de la nación en cuanto a inmigración ilegal. Su objetivo es identificar, procesar y deportar a los inmigrantes indocumentados. La Ley, cuyos defensores y detractores por igual la consideran la medida más amplia y estricta en generaciones, criminaliza el no portar consigo papeles de inmigración y da a la policía el amplio poder de detener a cualquiera que sea sospechoso de estar en el país de forma ilegal. Los detractores lo consideran una invitación abierta para el hostigamiento y la discriminación hacia los hispanos. La Casa Blanca contestó inmediatamente con la petición al Congreso de revisar y legislar nuevas normas para los inmigrantes indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos y para aquellos que intenten entrar a Estados Unidos en un futuro.

La Casa Blanca ha afirmado que las Leyes de Inmigración son una responsabilidad del Gobierno federal y no de los Gobiernos estatales. La Ley de Arizona será recurrida en los Tribunales y posiblemente llegue hasta la Corte Suprema en uno o dos años para un dictamen final. Es probable que cualquier medida del Congreso sólo sea viable después de las elecciones presidenciales de 2012 en las cuales el tema de la inmigración seguirá siendo controvertido en todo el país.

La cuestión de la inmigración es aún más compleja debido al peso del voto hispano en las elecciones locales, estatales y nacionales. Los dos partidos consideran a esta comunidad como crecientemente estratégica y cada vez más significativa en sus cálculos electorales. La comunidad se muestra progresivamente más preocupada por lo que ellos consideran una discriminación categórica y falsas acusaciones contra los motivos y actuaciones de los hispanos en Estados Unidos. Esta cuestión está condenada a convertirse en un asunto más emocional y político a medida que se acercan las elecciones de 2012.

IV. Conclusiones

Hay otras cuestiones que enturbian el estado actual de las relaciones entre EEUU y América Latina. La creciente presencia de China en América del Sur preocupa a algunos miem-

bros del Congreso que ven la cada vez mayor presencia de Beijing, tanto a nivel diplomático como comercial, como un reemplazo de la influencia de Estados Unidos. Existe una preocupación poco perceptible en la región en cuanto a China, desde que, para América del Sur, se han dado superávit comerciales impulsados por el inexorable apetito de China por los productos de primera necesidad y las materias primas.

Claro que existe cierta inquietud porque las relaciones comerciales puedan hacer retroceder a algunos gobiernos al tratar de incrementar el valor de sus exportaciones. Ese es un reto del desarrollo de la región a largo plazo. Pero, en general, la presencia china ha sido beneficiosa y Beijing ha sido sensata en cuanto a su creciente rol esforzándose mucho por evitar desafiar los intereses de seguridad, cruciales para Estados Unidos en el hemisferio occidental.

La guerra al narcotráfico es otro tema de gran preocupación. Cada vez más, los Estados de la región consideran la postura de Estados Unidos como inaceptable. La venta y el consumo de drogas en Estados Unidos y los países de la UE mantienen el comercio. La violencia que ahora caracteriza el funcionamiento de los cárteles tiene un tremendo impacto en el día a día de la región, mientras que apenas lo tiene en Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos se niega a reconocer ese hecho. La criminalidad que acom-

paña a la industria del narcotráfico va a ir en aumento, al igual que la violencia, pero existe poca voluntad política en Washington para afrontar esta cuestión altamente emocional y política.

Las relaciones de Estados Unidos con los países de la región van a seguir a la deriva. Tanto desde los altos cargos del Congreso como del poder ejecutivo se presta poca atención a América Latina. Mucho se ha hablado de la necesidad de buenas relaciones, pero, como se ha destacado con anterioridad, se ha dado un escaso, por no decir nulo, avance en la resolución de las cuestiones pendientes en ambos partidos políticos estadounidenses por igual. La búsqueda de alternativas para la región va a continuar –China, la Unión Europea, otros socios en materia de comercio e inversiones, etc.–. En el caso de que Estados Unidos despierte y decida abordar las cuestiones políticas más pertinentes, la respuesta de la región puede ser poco entusiasta y en ciertos casos hasta hostil.

Referencias bibliográficas

- Council on Foreign Relations, New York: "A conversation with U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton", discurso dado ante el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) el 8 de septiembre de 2010 en Washington, http://www.cfr.org/publication/22896/conversation_with_us_secretary_of_state_hillary_rodham_clinton.html
- Hidalgo, Manuel (2010): "Hugo Chavez's 'Petro-Socialism.'" *Journal of Democracy*, Johns Hopkins University Press, Baltimore Maryland, pp. 78–92.
- Kuczynski, Pedro-Pablo y John Williamson, editors (2003): *After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America*, Institute of International Economics, Washington, D.C.
- O'Neil, Shannon (2009): "The Real Risk in Mexico," *Foreign Affairs*, Council on Foreign Relations, Nueva York, pp. 63–77.
- Roett, Riordan (2010): *The New Brazil*, Brookings Institution Press, Washington, D.C.
- Roett, Riordan y Guadalupe Paz, editors (2008): *China's Expansion into the Western Hemisphere: Implications for Latin America and the United States*, Brookings Institution Press, 2008.
- Whitehead, Laurence (2010): "The Crash of '08", *Journal of Democracy*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, pp. 45–56.

